El Paro Nacional o la urgencia de cambios democráticos en el Estado y el pago de la deuda social a las mayorías populares y las regiones

Imprimir

La gran movilización social en Colombia por la paz y la democracia tiene un nuevo capítulo a partir del paro nacional que se inició el 28 de abril. Colombia vive la protesta masiva de un pueblo que fatigado de la arbitrariedad y la violencia del Estado y de una clase política corrupta, decidió rechazar las medidas gubernamentales que pretendían imponer una nueva reforma tributaria draconiana cargada de nuevos impuestos contra un pueblo angustiado y empobrecido y además en medio de una pandemia que a la fecha ha cobrado más de 75.000 vidas, miles de empresas cerradas, desempleo, carestía y 21 millones de colombianos en condiciones de pobreza.
Quedo demostrado que el gobierno corporativo de Duque ha fracasado con sus políticas de gobierno y administración del Estado; ha sido incapaz de dar las respuestas adecuadas a los altos riesgos de muerte de la pandemia, ha condenado al hambre y al cierre a miles de micro y pequeñas empresas que son las mayores generadoras de empleo en Colombia, los recursos financieros de "ayudas" fueron asignados para los amigos del gobierno, las grandes empresas y consorcios, un descarado manejo de corrupción con billones de pesos que solo explican su manejo clientelista y excluyente a favor del gran capital.

Las respuestas del gobierno corporativo dominado por el uribismo y los gremios dueños del poder económico nacional, han sido desde los anuncios de las reformas en el congreso siempre equivocadas, su actitud característica es oídos sordos a las demandas populares y sociales, además de represión policial y desgobierno. El paro nacional ha obligado al gobierno del Presidente Duque a retirar la nefasta reforma tributaria; la consecuencia es contundente con la renuncia del ministro de Hacienda Carrasquilla, autor y ponente principal de ese draconiano proyecto.

Grave error del gobierno Duque, de insistir torpemente en medio de la crisis de la pandemia, en una reforma tributaria que afecta a la mayoría de los colombianos, principalmente a la clase media, a los trabajadores y pequeñas empresas. Tenemos un gobierno nacional que no quiere escuchar ni atender el sufrimiento de miles de familias en el desamparo del No futuro para las próximas generaciones condenadas al desempleo y el hambre.

Así, Colombia y sus regiones se ha convertido en un hervidero de indignación ciudadana y popular que tiene paralizado al país y a su economía en las diferentes actividades laborales productivas, salvo los servicios esenciales; una movilización de las regiones y culturas, de los sectores étnicos y sociales populares, de la micro, pequeña y mediana empresa, de la economía informal, de los campesinos y transportadores, de los comunales, docentes y de los sindicatos.

Aunque se anuncian diálogos con diversos sectores sociales y con el comité nacional de paro, también se escuchan alertas de una estrategia del alto gobierno para desgastar el movimiento en dilatar tiempos con mesas y reuniones sin resultados, y en medio de la continuidad de la represión militar; Su objetivo sería insistir en un nuevo proyecto de reforma tributaria que contiene los peligros de siempre: que sea el pueblo el pague la corrupción, el desgobierno, la burocracia inútil y los nuevos impuestos.

¿Hasta qué punto el gobierno de Duque está dispuesto a realizar acuerdos eficaces y reformas incluyendo las propuestas alternativas de amplios sectores académicos, políticos y sociales? Será posible concertar una justicia tributaria, una renta básica para los desempleados y pobres, que los que más tienen paguen, que se acaben los privilegios, las evasiones y las exenciones.?

La juventud señala el futuro deseado

De manera relevante la juventud colombiana de los sectores populares, las universidades, colegios y barrios populares están mostrando su talento creativo, con nuevas expresiones artísticas, música, comparsas, pinturas murales, mensajes literarios y poesía por la paz y la vida, contra el mal gobierno, las violaciones de derechos humanos y el abuso de la fuerza policial del ESMAD (escuadrón policial antidisturbios) y la presencia militar.

Después de 14 días ininterrumpidos de paro nacional, la juventud se ha hecho protagonista de la movilización al lado de diversos sectores populares, indígenas, campesinos, sindicales y con el respaldo de diferentes fuerzas de oposición política al gobierno como la Colombia

Humana y la Alianza Verde, el POLO democrático, Los Comunes, el Partido Liberal.

La protesta mantiene un carácter pacífico pero rechaza la violencia del gobierno y mantiene en alto la bandera de rechazar los proyectos de reforma tributaria y de la salud del gobierno, reclamar soluciones efectivas al cese de los asesinatos contra líderes sociales, el cumplimiento de los acuerdos de paz y de otros acuerdos firmados con movimientos sociales y sindicales anteriores, que se han incumplido, además incorporar el incremento de significativas modificaciones al presupuesto nacional social y una renta básica de sostenibilidad a los sectores vulnerables en condiciones de pobreza afectados por la pandemia.

A la fecha el presidente Duque no ha querido escuchar el clamor y las propuestas alternativas de solución a la crisis económica en el interés de abrir espacio a un verdadero dialogo nacional. Colombia debe asumir la tarea del incorporar el diálogo nacional en la cultura política y en los procesos de transformación de los conflictos sociales, laborales o políticos, reconociendo a los más afectados como sujetos de derechos y participación con voceros propios.

Es rotundo el rechazo contundente de la ciudadanía y movimientos sociales a la corrupción impune en la administración pública, a sus contratistas, y a las políticas públicas neoliberales, principales causantes de la crisis social y política, condiciones que hacen evidente un giro democrático estratégico en el manejo del Estado y sus poderes públicos.

La “Seguridad Democrática militarista” en decadencia

En medio de la tragedia por los dolorosos hechos violentos de muertes, heridos, desaparecidos, torturados y detenidos en el paro nacional, es interesante constatar la franca caída de respaldo y opinión ciudadana sobre el pensamiento uribista y la figura de su líder autoritario Álvaro Uribe Vélez, igual que al presidente Duque, cuyos sondeos de opinión se ganan el rechazo de más del 70% de los ciudadanos.

La gente y especialmente los jóvenes, ya no le cree ni le tiene el miedo al caudillo Uribe ni a

su presidente en el gobierno acusado de miles de crímenes; las movilizaciones hablan de un rechazo a esa vieja política represiva y militarista. Por el contrario, su mensaje es de esperanza y lucha por un nuevo país con justicia social, decente y democrático.

La calamitosa situación de violencia social y política, profundizada con el tratamiento militar a la legitima protesta social fue ordenada por el alto gobierno uribista, quien también ordeno la militarización de las ciudades arrojando graves y múltiples violaciones de derechos humanos provocando el terror y nuevos hechos de muerte de civiles en diferentes ciudades especialmente en Cali, Medellín, Bogotá, heridos, desaparecidos y marchas violentamente reprimidas en Bucaramanga, Pasto, Neiva y otras localidades con inusitado abuso de la fuerza policial, abuso de autoridad.

Múltiples fuentes comunitarias y populares siguen inundando las redes sociales denunciando graves hechos violentos ocurren bajo órdenes del ministerio de defensa del gobierno nacional, dejando a la luz que los gobiernos locales y regionales, alcaldes y gobernadores, no tienen la responsabilidad ni autoridad del orden público, pues la policía en Colombia no es un cuerpo civil sino una fuerza direccionada por el estamento militar nacional.

Sin embargo, podemos observar con otra óptica por venir, que estamos en un difícil proceso de transición política y cultural, un tanto caótico, hacia la paz y la convivencia pacífica; la sociedad Colombiana incluidos diverso medios de comunicación, sectores de opinión política y ciudadanía, están entendiendo en medio de la diversidad y las diferencias, a indagar por la verdad de la información que circula, a respetar la diversidad de opiniones y argumentos, a incorporar el respeto al derecho escuchar y ser escuchado, a la importancia de la protesta y a la manifestación pacífica que reclama derechos democráticos esenciales como justicia social, respeto a la vida, democracia, derecho a la paz y participación social.

Las soluciones violentas no caben en una agenda de dialogo social. Militarizar la ciudad y el país, no es ninguna vía de solución, por el contrario, sería otra tragedia con más violencias. Será el dialogo democrático el mecanismo que permita el reencuentro de los colombianos Un verdadero acuerdo supone garantías para la participación de los más amplios sectores de la

sociedad colombiana.

La indignación general del pueblo colombiano está señalando el desastre de la corrupción sin límites de la clase política en el poder y la urgencia de un cambio con democracia y transparencia que reoriente la conducción de las instituciones hacia el interés general y los anhelos paz y convivencia largamente aplazado por los viejos partidos y sus intereses antipopulares.

Estamos a un año de las elecciones para un nuevo Congreso de la República y un nuevo presidente, situación que anima a la unidad por perfilar una alternativa plural y democrática en Colombia. Por lo tanto, se hace imperativo la negociación de un acuerdo con el gobierno nacional para avanzar en las condiciones y demandas populares, mantener la mayor cohesión democrática de los movimientos sociales y políticos alternativos y levantar el paro con un triunfo con garantías

Sin duda esta gran movilización ciudadana abre a la luz la esperanza para un camino alternativo de sociedad decente y democrática con la propuesta de una Colombia Humana de construir entre todas las fuerzas democráticas, políticas y movimientos sociales, causas regionales, laborales, de equidad de género, étnicas y ambientales, el *Pacto Histórico* que sea capaz de sacar a Colombia de la guerra, del atraso social y económico, de la pobreza y la exclusión política y social.

Queda claro que aún no hay soluciones y son muchas las dificultades y problemas por exigir solución: Garantías para el ejercicio político de la oposición, El cabal cumplimiento de los acuerdos de paz, la reforma a la salud, la judicialización y justicia para los responsables de asesinatos de líderes sociales, excombatientes y manifestantes en todo el país, el fracking, la minería en los páramos de Colombia, el atraco legalizado de los peajes, las tarifas de los servicios públicos, la anunciada reforma laboral y pensional, etc. Todo un plan de contención que supone y exige la continuidad de la movilización popular por una verdadera democracia participativa y la paz deseada.

Como lo afirmo Gusta Petro resaltando el esfuerzo de la juventud y la gente trabajadora en el paro nacional, “El pueblo colombiano ha aprendido la fuerza de su propia acción colectiva. Ha ganado la confianza en sí mismo y la posibilidad de cambiar la historia.”

Jorge Castellanos Pulido

Foto tomada de: https://www.alertasantanderes.com/